



MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2019

Representante Richard Neal
Presidente del Comité de Medios y Arbitrios
Cámara de Representantes de Estados Unidos
P r e s e n t e

Distinguido congresista:

Me refiero a la conversación sostenida en Palacio Nacional de Ciudad de México el pasado 8 de octubre del presente. Al respecto, me permito reiterar mi agradecimiento por el trabajo realizado hasta ahora con miras a la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin duda alguna, la entrada en vigor del T-MEC beneficiará a millones de mexicanos, estadounidenses y canadienses al mejorar la competitividad de toda la región.

↖ La situación laboral y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en México constituyen una de las principales deudas del pacto comercial aún vigente. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México apostó por los salarios bajos y el debilitamiento de los sindicatos, lo cual tuvo como consecuencia una profundización de la desigualdad regional, situación que personalmente he denunciado a lo largo de los últimos años y cuya superación constituye un eje central de mi gobierno.

A efecto de hacer frente a las anteriores y otras preocupaciones, desde mi campaña presidencial impulsé una profunda reforma legal en materia laboral, hoy aprobada y en proceso de implementación. La reforma laboral que hoy está en marcha, y cuya implementación contempla un proceso de cuatro años en la propia ley, pondrá a México a la vanguardia de los derechos laborales en

Latinoamérica y garantizará la democracia y libertades sindicales como no se había hecho en más de tres décadas.

Como es natural, las transformaciones enfrentan resistencias y hasta esta fecha los cambios legislativos han sido objeto de 425 demandas de amparo interpuestas por sindicatos históricamente beneficiados del viejo sistema; sin embargo, es importante considerar que 224 de estos procedimientos ya han sido desestimados por improcedentes. Con pleno respeto a la independencia del Poder Judicial, el Gobierno de México confía plenamente en los cambios legislativos que se han emprendido y al respecto, debe advertirse que aún en el improbable caso de que los procedimientos restantes fueran considerados procedentes, por regla general sus efectos estarían limitados a los quejosos.

Más aún, como muestra de la voluntad de mi gobierno para la ratificación del T-MEC, he hecho un llamado a los distintos órganos competentes del Gobierno de México para la instrumentación de las siguientes tres acciones.

En primer lugar, nuestra anuencia para la asignación por parte del Poder Legislativo, si así lo considera, de un presupuesto suficiente para la implementación de la reforma laboral aprobada en mayo de este año. Debo destacar que, atendiendo a las inquietudes expresadas por ustedes, y como fue mi compromiso en la conversación que sostuvimos, he instruido al secretario de Hacienda y Crédito Público para que solicite a la Cámara de Diputados y a las legislaturas locales un incremento del presupuesto inicial en sus distintos rubros y etapas a fin de garantizar que éste sea suficiente. Además de un inmueble con valor de 23,188,405,80 USD que será aportado por el gobierno federal para el funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitarán la aprobación de un presupuesto adicional que conjuntamente ascenderá a 69,336,589 USD para 2020, mismo que estará destinado a la creación de las nuevas instituciones en materia laboral y la implementación de las reformas aprobadas de la siguiente manera: 9,098,203 USD para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; 18,765,000 USD para los Tribunales Laborales Federales; 17,980,875 USD para los Centros de Conciliación Locales; 13,505,850 USD para los Tribunales Laborales Locales y 9,986,661 USD adicionales para programas de capacitación, difusión y verificación de la STPS.

De igual forma, en caso de que fuera necesario el aumento de recursos para la implementación de los cambios propuestos, tengan la certeza de que iniciaré el proceso debido ante el Congreso de la Unión para garantizar los fondos adicionales requeridos.

Además, en los años subsecuentes, la STPS y la SHCP prevén que se destinen 830 millones de dólares para estos mismos fines, repartidos de la siguiente forma: 176,302,164 USD para 2021; 324,832,546 USD para 2022 y 327,964,423 USD para 2023 y los años sucesivos.

Cabe subrayar que los montos señalados son adicionales al presupuesto propio de la STPS, sobre el cual se ha propuesto una reducción del 33%. Dicho ajuste nada tiene que ver con la implementación de la reforma laboral, sino que responde al programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", al cual se le destinó en 2019 el 94% del presupuesto de la STPS, pero requerirá menos recursos para 2020.

A En segundo lugar, el cumplimiento de un calendario en tres etapas, teniendo como ejes la transición hacia un nuevo sistema de justicia laboral, la recuperación de la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica, así como la creación de nuevas instituciones en materia laboral. La primera etapa iniciará el 1° de octubre de 2020 e incluye diez entidades federativas, la segunda etapa comenzará operaciones el 1° de octubre de 2021 e incluye a once entidades federativas adicionales y, por último, la tercera etapa empezará operaciones el 1° de mayo de 2022 e incluye a las once entidades federativas restantes. La implementación escalonada de esta reforma obedece al gran calado de la transformación que se desarrollará en beneficio de los trabajadores. Se revisarán cerca de 550 mil contratos colectivos de trabajo que deberán ser legitimados o, en su caso, reemplazados mediante el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. Asimismo, se sustituirán las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, dependientes del Poder Ejecutivo, por tribunales laborales federales y locales, ahora dependientes del Poder Judicial, y se crearán centros de conciliación federales y locales, así como un centro de registro de sindicatos y contratos colectivos a nivel nacional.

Para asegurar el cumplimiento de las diversas disposiciones contenidas en la legislación laboral, desde la presidencia he exhortado a las autoridades responsables a emprender un combate frontal contra la impunidad en materia laboral, particularmente por lo que hace a las libertades sindicales. Para supervisar los procedimientos de democracia sindical y atendiendo nuevamente a sus inquietudes respecto a la cantidad y capacidad de verificación, he instruido aumentar la plantilla de verificadores de 478 a 610 en la STPS y de 96 a 192 en el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

En tercer lugar, subrayo que el aumento de los salarios mínimos de los trabajadores ya es una realidad. A inicios del presente año el salario mínimo se duplicó en la zona fronteriza del norte y aumentó 16% en el resto del país. Adicionalmente, les manifiesto la intención de este gobierno para que los salarios continúen incrementándose al menos a una tasa de dos puntos porcentuales por arriba de la tasa inflacionaria cada año. Los anteriores objetivos se encuentran alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde se planteó como objetivo lograr una recuperación de cuanto menos el 20% del poder adquisitivo de los salarios en México.

Los cambios descritos dan cuenta del compromiso del actual gobierno con el mandato que en él han depositado más de treinta millones de votantes: el del combate a la desigualdad, el mejoramiento de las condiciones de los sectores más desfavorecidos y la garantía de la libertad y la democracia en todos los ámbitos de la vida pública. Hacer frente a estos retos de manera decidida yace en el centro de nuestras convicciones.

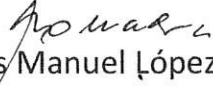
Concluyo señalando que la situación laboral es pieza fundamental en la cuarta transformación por la que atraviesa México y representa una coincidencia esencial con las inquietudes que los congresistas demócratas han expresado frente a la ratificación del T-MEC. Estas coincidencias no deberían ser motivo de separación, sino de estrecho acercamiento para una ratificación expedita del tratado.

En la medida que nuestro gobierno sostiene la política laboral que he descrito por convicción propia, tengo la absoluta certeza de que mantendremos esa política sin variación. En ese sentido, les comunico que el Gobierno de México no tiene reservas respecto a implementar mecanismos que permitan asegurar

el cumplimiento de lo aquí asentado, del mismo modo que ha propuesto mecanismos similares para el caso de obligaciones a cargo de EE. UU. o Canadá. Por ello estará a disposición de ustedes el subsecretario para América del Norte y jefe negociador del T-MEC, Jesús Seade, a efecto de que se establezcan dichos mecanismos de forma satisfactoria para ambas partes, teniendo como único límite lo que establece nuestra Constitución, las leyes y el debido respeto a las soberanías de nuestras naciones. Soy un hombre de palabra y el Gobierno de México honrará sus compromisos plenamente.

Hago votos para que esta información les sea útil para tomar una decisión favorable a nuestros pueblos, lo más pronto posible. Le envío mis saludos a usted y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Atentamente,


Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos



MÉXICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



2019
AÑO DEL CASTILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

Mexico City, October 14, 2019

The Honorable Richard Neal
Chairman
Committee on Ways and Means
United States House of Representatives

Dear Chairman Neal:

I write in regard to the conversation held on October 8 in the National Palace in Mexico City. I would like to reiterate my appreciation for the work that has been done thus far with the aim of ratifying the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). The entry into force of the USMCA will unquestionably benefit millions of Mexicans, Americans and Canadians by improving the competitiveness of the entire region.

The employment situation and the loss of purchasing power of wages in Mexico are among the most important deficiencies of the current trade agreement. When the North American Free Trade Agreement (NAFTA) entered into force, Mexico opted to keep wages low and to weaken the trade unions. This resulted in deepening the regional inequalities in the country, which is something that I have personally criticized for many years. Bridging these gaps is a core issue for my government.

In order to address these and other concerns, from the very beginning of my presidential campaign I have promoted far-reaching labor law reforms that have now been approved and are being implemented. The labor reforms that are underway today and whose implementation will be complete in four years, as provided for in the new law, will put Mexico at the forefront of

labor rights in Latin America and will guarantee union democracy and the rights of union members as has not been done in more than three decades.

As might be expected, there is always resistance to transformation. To date, these changes to the law have given rise to 425 lawsuits filed by unions that in the past have benefited from the old system. However, 224 of these have already been dismissed as unwarranted. While the Government of Mexico fully respects the independence of the judiciary, it also fully believes in the legislative changes that are underway. Even in the unlikely event that the remaining lawsuits are allowed to proceed, as a general rule, any decisions would be limited to the complainants.

As a further sign of my government's interest in ratification of the USMCA, I have called on the corresponding areas of the Mexican government to take the following three actions:

First, we have agreed that the legislature can budget the necessary amount to implement the labor reform approved this May, should it so decide. Please note that in response to the concerns you raised during our conversation and as I committed to do at that time, I have instructed the Secretary of Finance and Public Credit to ask the Chamber of Deputies and the local legislatures to increase the initial budget, in its various line items and stages, to ensure that it is sufficient. The federal government will provide a property valued at USD 23,188,405.80 for the Federal Center for Labor Conciliation and Registration. In addition, the Ministry of Labor and Social Welfare (STPS) and the Ministry of Finance and Public Credit (SHCP) will each ask for additional budgets that together will total USD 69,336,589 for 2020, which will go to creating new labor institutions and to implementing the reforms that have been approved, as follows: USD 9,098,203 for the Federal Center for Labor Conciliation and Registration; USD 18,765,000 for the Federal Labor Courts; USD 17,980,875 for Local Conciliation Centers; USD 13,505,850 for Local Labor Courts and an additional USD 9,986,661 for STPS training, publicity and verification programs. Similarly, if more funds are needed to implement the proposed changes, you can be assured that I will take the necessary steps with Congress to guarantee the additional funds.

In addition, in the years to come, the STPS and SHCP anticipate that 830 million dollars will be allocated for the same purposes, distributed as follows: USD 176,302,164 in 2021; USD 324,832,546 in 2022 and USD 327,964,423 in 2023 and subsequent years.

Please note that these amounts are in addition to the STPS budget, for which a 33% cut has been proposed. This adjustment has nothing to do with implementation of the labor reform, but rather reflects changes to the "Youths Building the Future" program, which received 94% of the STPS budget in 2019 but will require less funding in 2020.

Second, we have a three-stage timetable for transitioning to a new system of labor justice, to restore democracy to the trade unions and to achieve true collective bargaining, in addition to creating new institutions for labor issues. The first stage will begin on October 1, 2020, and includes ten states; the second stage will start on October 1, 2021 for an additional eleven states; and the third stage will begin on May 1, 2022 for the eleven remaining states. The reform is being phased in gradually because it represents a far-reaching transformation that will result in benefits for Mexico's workers. About 550,000 collective labor agreements will have to be reviewed and legitimized or, if necessary, replaced by providing for a free, direct and secret voting process by the workers. In addition, the current Conciliation and Arbitration Boards, under the Executive Branch, will be replaced by federal and local labor courts, now under the Judiciary, and federal and local conciliation centers will be created, as well as a national registry of unions and collective contracts.

To ensure compliance with the provisions of the labor law, as President I have urged the responsible authorities to engage in a frontal attack on impunity in labor issues, especially those related to the freedoms of labor unions. In order to oversee the procedures related to trade union democracy and to address your additional concerns regarding the amount and capacity for verification, I have instructed the STPS to increase its staff of verifiers from 478 to 610, and the new Federal Center for Labor Conciliation and Registration to increase its staff from 96 to 192.

Thirdly, I would like to highlight the fact that we are already increasing the minimum wage. At the beginning of this year, the minimum wage was doubled along the northern border, and increased by 16% in the rest of the country. Furthermore, I assure you that this government intends to continue increasing wages by at least two percentage points above the inflation rate each year. These goals are in line with the 2019-2024 National Development Plan, which includes the goal of restoring at least 20% of the purchasing power of workers' wages in Mexico.

The changes described above are clear evidence of the current government's commitment to the mandate given to it by more than thirty million voters: to fight against inequality, to improve the conditions of the most disadvantaged sectors of society, and to guarantee freedom and democracy in all areas of public life. Confronting these challenges with determination is at the center of our beliefs.

I would like to conclude by pointing out that the employment situation is a fundamental part of the fourth transformation in Mexico, and it is a key area of agreement: we share the concerns expressed by the Democratic congressmen regarding ratification of the USMCA. These areas of agreement should not be grounds for keeping us apart, but rather for us to work together closely on ratifying the treaty expeditiously.

Our government is committed to this labor policy, and I am absolutely certain that we will carry it out as described. I inform you that the Government of Mexico has no reservations regarding the implementation of mechanisms that will ensure compliance with the provisions I have set forth in this letter, and it has proposed similar mechanisms for the obligations of the United States and Canada. To this end, the undersecretary for North America and chief negotiator of the USMCA, Jesús Seade, will be available to you to establish these mechanisms to the satisfaction of both parties, the only limit being our Constitution, laws and due respect for the sovereignty of our nations. I am a man of my word and the Government of Mexico will fully honor its commitments.

I hope that this information helps you to make a decision that benefits our citizens, as soon as possible. I send my regards to you and Speaker of the House Nancy Pelosi.

Sincerely,

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Constitutional President
of the United Mexican States

National Palace, Plaza de la Constitución s / n, Patio de Honor, 06066 Cuauhtémoc, Mexico City